

I

De acuerdo con la Exposición de Motivos y la MAIN del anteproyecto de ley, este se basa en un enfoque de derechos humanos, alineándose con las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2007.

En particular, el anteproyecto busca fortalecer la normativa existente en materia de discapacidad y dependencia, estableciendo la accesibilidad universal como un derecho para asegurar una inclusión social plena de todas las personas afectadas, con el propósito de garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad y promover su autonomía personal. Además, se pretende una consideración singularizada de las necesidades específicas de las mujeres y de la infancia con discapacidad.

El texto que se informa aborda los derechos de las personas con discapacidad, la promoción de nuevas medidas para la inclusión social y el refuerzo de la autonomía. Asimismo, el anteproyecto prevé medidas para la implementación de políticas públicas que aseguren entornos accesibles para las personas con discapacidad, promoviendo una sociedad más inclusiva.

Las modificaciones legales propuestas pretenden la promoción de determinadas políticas públicas, especialmente en el ámbito de la accesibilidad, la integración laboral y educativa, y la garantía de servicios adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad. En este sentido, **el presente informe atenderá especialmente a la recogida y tratamiento de datos personales vinculados a los derechos de estas personas, cuyo análisis de necesidad se impone en atención a las exigencias derivadas de la normativa de protección de datos.**

El anteproyecto de ley se estructura en una exposición de motivos, dos artículos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y seis disposiciones finales. Estas últimas disposiciones establecen, respectivamente, la modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal; la modificación de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro; la autorización al Gobierno para la refundición de textos legales sobre propiedad horizontal y barreras arquitectónicas; la habilitación para el desarrollo normativo de la propia ley; la aprobación de un marco de referencia sobre ajustes razonables en materia de no discriminación, igualdad de trato y accesibilidad universal de personas con discapacidad; y la entrada en vigor de la norma.

II

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos —RGPD—), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales —LOPDGDD— conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

Entre otras definiciones, el artículo 4 del RGPD se refiere a «datos personales» como toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Y «tratamiento» como cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

El art. 4.15 del RGPD define datos de salud como datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud.

El art. 9.1 del RGPD prohíbe el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, y *datos relativos a la salud* o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.

Únicamente dicha prohibición no será aplicable cuando se dé alguna de las circunstancias del apartado 2, y entre ellas cuando se den las causas de los apartados b), y g) a j) del mismo (*que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social; que el tratamiento sea necesario por*

razones de un interés público esencial; que sea necesario por razones de la salud del trabajador o asistencia sanitaria o social; por razones de interés público en el ámbito de la salud pública; o por razones de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos). Todo ello, en los términos y con las condiciones que se establecen en dicho artículo 9 del RGPD.

Específicamente, la **letra h)** del artículo 9.2 RGPD, señala que lo dispuesto en el apartado 1 de dicho artículo no será aplicable cuando:

“h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, **prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social**, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3; (la negrita es nuestra)
(...)”

A su vez, la base de legitimación para el tratamiento de datos previsto en el anteproyecto de ley se encuentra en el artículo **6.1, apartados c) y e) del RGPD**, que establecen que el tratamiento es lícito cuando (i) es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, o bien cuando (ii) es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. En este contexto, la prohibición inicial para el tratamiento de datos sobre “prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social”, considerados de especial protección, se levanta en el artículo 9.2.h) del RGPD, al ser necesario dicho tratamiento para la gestión de servicios asistenciales sobre discapacidad y dependencia, garantizándose las medidas necesarias de seguridad y confidencialidad. Una vez levantada la interdicción, la base legal legitimadora de dicho tratamiento se contiene en el artículo 6.1, letras c) y e), del RGPD.

El anteproyecto sometido a informe modifica —manteniendo el correspondiente rango de ley formal—, el contenido de diversos preceptos del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, plasmando en dichas normas las nuevas previsiones expuestas tanto en su MAIN, como en la Exposición de Motivos.

Así, entre otros, se modifican los artículos 2, 4, 6, 7, 10, 14, 17, 18, 22, 37, 43, 44, 45, 59, 73, 81 y 101 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y los artículos 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21 al 29, 32 al 35, y

37 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. A su vez, se introducen tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y seis disposiciones finales, a las que se hizo mención *ut supra*.

Las referidas previsiones normativas, establecidas en una norma con rango de ley formal, responden a las exigencias derivadas del artículo 8 de la LOPDGDD, cuando dispone que:

“Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con **rango de ley**, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. (la negrita es nuestra)
2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con **rango de ley**.” (la negrita es nuestra)

III

El artículo primero del anteproyecto de ley que se informa modifica varios artículos e introduce algunos nuevos preceptos en el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Los cambios incluyen la ampliación de conceptos clave, la incorporación de nuevos derechos y garantías, y el refuerzo de principios como la inclusión, la autonomía personal y la desinstitucionalización. Las pretendidas modificaciones, en particular los artículos 2, 4, 6, 7 bis y 7 ter, generarán un **impacto significativo en el tratamiento y protección de los datos personales de las personas con discapacidad**.

Desde la perspectiva del RGPD, estas reformas suponen verdaderos retos en cuanto a los **principios de minimización, licitud, integridad, seguridad y confidencialidad de los datos sensibles (artículo 5 y 9 RGPD)**.

El artículo 2 modifica las *Definiciones* del sistema, incidiendo en las siguientes:

- Inclusión: Implicará un mayor uso de datos personales para garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en distintos ámbitos (educativo, laboral, sanitario, etc.), requiriendo estrictos controles de minimización y licitud del tratamiento.
- Ajustes razonables: Su ampliación a los ámbitos cognitivo, comunicativo y social puede derivar en la necesidad de tratar datos sensibles. Se debe garantizar la concurrencia de una base jurídica adecuada, generalmente basada en el consentimiento expreso o en el interés público (art. 9.2 RGPD).
- Capacitismo: Aunque no genera un impacto directo en protección de datos, la inclusión de este término enfatiza la necesidad de evitar sesgos que supongan la creación de perfiles contrarios a la normativa aplicable en el tratamiento automatizado de datos.
- Desinstitucionalización: La transición a modelos de atención comunitaria implica la recopilación y transmisión de datos entre instituciones y personas jurídico-públicas y privadas debidamente acreditadas, lo que requiere medidas de seguridad avanzadas y protocolos de interoperabilidad entre sistemas.

Por su parte, la modificación del artículo 4.2, conlleva la ampliación de los criterios de determinación de la discapacidad, al incluir en la definición legal de discapacidad a las personas con reconocimiento oficial de dependencia, a los pensionistas de incapacidad permanente y jubilados por incapacidad permanente.

Este cambio supone un **incremento en el tratamiento de datos sensibles derivados de resoluciones administrativas y certificaciones médicas**, que aconseja reforzar las medidas de seguridad para el acceso a estos datos y garantizar su tratamiento bajo el principio de minimización del artículo 5 RGPD.

Por su parte, la modificación del artículo 6 de la Ley, supone la ampliación del ámbito de actuación derivado de la “Autonomía de las personas con discapacidad”. Así, el uso de formatos accesibles y adaptados al afectado deberá asegurar la debida comprensión de este en relación con el **otorgamiento de su “consentimiento informado”**, en relación con las acciones, tareas y apoyos recogidos en el precepto que se modifica. Dicha previsión implica obligaciones en materia de protección de datos, es especial en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Reglamento general de

protección de datos (transparencia e información del interesado), y en el propio artículo 6.1 a) del propio RGPD.

También en cuanto a la incidencia de las modificaciones legales previstas en materia de protección de datos, (i) la elección de residencia implica la recopilación de datos sobre preferencias personales y necesidades de apoyo, requiriendo que el tratamiento se limite a lo estrictamente necesario, (ii) la provisión de apoyos y asistencia comunitaria, requerirá la gestión de datos sensibles, exigiendo protocolos de confidencialidad y control de acceso estricto, y (iii) la accesibilidad y planes de desinstitutionalización, conllevará la recopilación de información sobre barreras existentes, asegurando que su uso no derive en discriminación.

Los artículos 7 bis y 7 ter establecen una serie de derechos inherentes a todas las personas, propugnando también su garantía en el ámbito de las personas con discapacidad. En este contexto, deben asegurarse las obligaciones de los responsables de los tratamientos en materia de protección de datos, tanto en la recopilación como en el uso de la información. Por otra parte, el refuerzo del principio de autodeterminación de las personas discapacitadas debe asegurar el libre ejercicio de los derechos de dichas personas en materia de protección de datos (por sí o por sus representantes legales).

En conclusión, **la reforma propuesta incrementará la cantidad y sensibilidad de los datos tratados sobre personas con discapacidad, lo que exige una aplicación rigurosa del RGPD, y el establecimiento de protocolos claros de obtención del consentimiento, garantizando el uso de formatos accesibles y comprensibles.**

A su vez, deben respetarse los principios del artículo 5 RGPD, y, muy especialmente el principio de minimización de datos, limitando su recopilación a lo estrictamente preciso para evitar exposiciones innecesarias.

En definitiva, las modificaciones normativas que se analizan refuerzan los derechos de las personas con discapacidad, pero también implican un reto en la protección de sus datos personales, **exigiendo medidas específicas para garantizar la seguridad, transparencia y minimización del tratamiento de la información.**

Por su parte, las modificaciones en los artículos 10, 14, 17 y 18, se refieren a la protección de datos en el marco de la accesibilidad universal al Sistema Nacional de Salud, la rehabilitación, la formación y la educación inclusiva. En estos ámbitos, la modificación legal busca garantizar la citada accesibilidad, la inclusión de personas con discapacidad en programas de

rehabilitación y habilitación, su integración en el ámbito formativo y su derecho a una educación inclusiva.

Estas modificaciones legales refuerzan la rehabilitación (art. 14), la formación en empresas y centros educativos (art. 17) y el derecho a la educación inclusiva (art. 18). Se establecen programas para fomentar la autonomía de las personas con discapacidad, contratos de formación en alternancia, y un conjunto de garantías de acceso a una educación de calidad.

Sin embargo, estos avances deben armonizarse con la protección de datos personales, especialmente cuando implican el tratamiento de información sensible, como la relacionada con la salud o la situación de discapacidad. Las principales implicaciones de las citadas modificaciones normativas en materia de protección de datos pasan por la necesidad de que:

- *Las personas con discapacidad reciban información clara sobre el tratamiento de sus datos personales, en formatos accesibles y comprensibles (transparencia y accesibilidad, con cumplimiento de los artículos 12 y 13 RGPD).*
- *En el caso de tratamientos específicos, debe garantizarse que las personas puedan otorgar un consentimiento explícito en condiciones de accesibilidad (consentimiento informado ex artículo 6.1 a) RGPD).*
- *Las plataformas digitales y los formatos accesibles deben contar con medidas de seguridad adecuadas para evitar accesos no autorizados, filtraciones o destrucción de datos sensible (seguridad de los datos del artículo 32 RGPD).*

A su vez, en materia de protección de datos, debe recordarse que, en la recopilación y tratamiento de datos realizado en orden a las previsiones de estos preceptos, **deberá limitarse dicha recogida y uso a los datos personales estrictamente necesarios, garantizando la privacidad, el consentimiento informado y el principio de confidencialidad (artículos 5, 12 y 13 RGPD).**

Por otra parte, en el ámbito laboral y formativo, deberá asegurarse la debida transparencia en la gestión contractual, que no será óbice para la *implantación de las correspondientes medidas de seguridad en plataformas digitales*. Además, **en la protección de datos educativos sensibles, deberá asegurarse el consentimiento de los afectados, y la seguridad** en las plataformas tecnológicas utilizadas en la enseñanza inclusiva.

En resumen, las modificaciones en los artículos 10, 14, 17 y 18 refuerzan el derecho a la inclusión en diferentes ámbitos, pero requieren una

implementación rigurosa en materia de protección de datos para garantizar la privacidad y la seguridad de la información de las personas con discapacidad.

IV

Por otra parte, también el artículo primero del anteproyecto de ley que se informa prevé la modificación de los artículos 22.1, 37.2, 43, 44, 45 y 59.2.

Las modificaciones propuestas en los artículos 22.1 y 37.2 buscan reforzar la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y en el entorno laboral. Sin embargo, estas modificaciones también conllevan **implicaciones significativas en la protección de datos personales, especialmente en lo relativo al acceso a la información y la gestión de datos sensibles en el empleo protegido**. De tal suerte, el artículo 22.1 refuerza la accesibilidad universal, incluyendo tecnologías de la información adaptadas (información clara y accesible), y el artículo 37.2 introduce mejoras en el empleo, regulando el empleo protegido en empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En este contexto, la información personal tratada sobre discapacidad y adaptaciones laborales comprenderá datos de categorías sensibles del RGPD, por lo que los tratamientos derivados de dicha información deben ajustarse a dicha norma.

Por su parte, el artículo 43 detalla los requisitos para empresas de inclusión laboral, con énfasis específico en los ajustes personales y sociales necesarios —así, se recolectarán, entre otros, datos de categorías especiales—; en el artículo 44 se establecen controles sobre las compensaciones económicas de dichas empresas —lo que conlleva el posible tratamiento de los datos personales de los trabajadores y/o de otras personas involucradas en el proceso—; y, en el artículo 45, se fomenta la creación de nuevas empresas inclusivas, implicando estudios y seguimiento de necesidades —lo que conllevará el tratamiento de los datos de diferentes personas directamente involucradas, incluyendo información sobre sus capacidades y necesidades laborales—.

En resumen, estos tres artículos supondrán un mayor tratamiento de datos sensibles de las personas discapacitadas, **resultando necesario adoptar las correspondientes medidas de confidencialidad y seguridad para evitar usos indebidos de información personal**. A su vez, deberá asegurarse que, **en su caso, se garantice el otorgamiento del consentimiento informado de las personas afectadas, utilizándose para ello formatos accesibles**.

Por su parte, el **artículo 59.2 impulsa las campañas de sensibilización** para promover una imagen positiva de la discapacidad. Estas iniciativas podrían requerir la recopilación y difusión de datos personales

—como imágenes y testimonios— de personas con discapacidad. Para garantizar la protección de estos datos, es fundamental obtener el consentimiento explícito de los implicados, asegurando el respeto a su privacidad y derechos. Además, debe evitarse cualquier enfoque que pueda dar lugar a la estigmatización o al uso indebido de la información personal de los afectados.

En conclusión, si bien estas campañas contribuyen a la inclusión social, su implementación debe equilibrar su visibilidad con el respeto a la privacidad. **La transparencia y el consentimiento previo son esenciales para evitar cualquier vulneración de derechos y prevenir el tratamiento inadecuado de datos sensibles.**

En cuanto el Observatorio Estatal de la Discapacidad, el artículo 73 amplía su función con un enfoque integral, reforzando la recopilación, actualización y difusión de información sobre discapacidad. Además, se consolida la accesibilidad universal como principio clave, influyendo en la planificación de políticas públicas.

El artículo 81.3 incorpora una nueva Infracción, bajo la letra e), en la que se tipifica la exposición pública de personas con discapacidad con fines de burla o mofa, cuando no constituya delito penal. Esta medida fortalece la protección contra la discriminación y el acoso, rechazando estereotipos y garantizando la dignidad, en línea con normativas internacionales.

Por su parte, el artículo 101, sobre procedimiento sancionador, establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de procedimientos sancionadores, que deberán iniciarse de oficio. Esto mejora la transparencia, la eficacia y la garantía de protección de derechos.

En resumen, según se observa, las modificaciones de los artículos 73, 81 y 101, refuerzan la recopilación y gestión de información sobre discapacidad, lo que exige una protección rigurosa de los datos personales. **Es crucial que el Observatorio implemente medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad y el tratamiento seguro de la información.**

Asimismo, la sanción por exposición pública abusiva subraya la importancia del consentimiento y el respeto a la privacidad en el uso de imágenes o datos personales de personas con discapacidad. Finalmente, la agilización de los procedimientos sancionadores contribuye a una respuesta más efectiva ante vulneraciones de derechos.

Finalmente, las medidas incorporadas a las nuevas disposiciones finales, transitorias y adicionales de la Ley se dirigen a la creación de registros y fondos específicos para mejorar la transparencia y sostenibilidad de las iniciativas desplegadas a favor de las personas con discapacidad. A saber:

- Registro estatal de tarjetas de estacionamiento: **Su implementación implica la gestión de datos sensibles**, por lo que la Dirección General de Tráfico debe garantizar medidas de seguridad y acceso restringido.
- Inclusión en inteligencia artificial y tecnología: **La recopilación de datos sobre discapacidad requiere protocolos que eviten usos discriminatorios y garanticen el anonimato y la confidencialidad**.
- Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal: La gestión de beneficiarios debe aplicar **políticas de minimización y anonimización de datos**.

En resumen, estas disposiciones impulsan la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad, mejorando la eficacia de las políticas públicas. Sin embargo, las modificaciones del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, previstas **en el anteproyecto de ley que se informa, requieren una adecuada implementación de la normativa de protección de datos, garantizando que el tratamiento de información personal se realice con las máximas garantías de seguridad y respeto a los derechos de las personas con discapacidad, en los términos que han quedado expuestos.**

En concreto, se echa en falta el reconocimiento general del derecho de las personas afectadas a la protección de sus datos de carácter personal. Así, del mismo modo que se prevé en relación con la modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (como se verá más adelante), se sugiere la incorporación de un artículo o la modificación del texto vigente (por ejemplo, lo previsto en el artículo 7, sobre “Derechos y obligaciones”), en el que se reconozca que:

“Las personas con discapacidad disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación vigente, debiendo respetarse la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales.

En este sentido, según se observa, las únicas menciones que el texto del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, contiene en relación con esta normativa, se incorpora de manera muy parcial en su vigente artículo

38, cuando se regula la “Orientación, colocación y registro de trabajadores con discapacidad para su inclusión laboral”, sin que las previsiones ahí contenidas sirvan para enervar la necesaria incorporación de una cláusula general de reconocimiento del derecho a la protección de datos en los términos del párrafo anterior.

Otras menciones parciales e insuficientes a la normativa de protección de datos se contienen en la actual versión de la ley, en sus artículos 92 y 104, en cuanto a la publicidad de las resoluciones sancionadoras, y en relación con la información sobre el procedimiento sancionador.

A mayor abundamiento, según se analiza, dichas menciones, además de parciales e inconexas, se refieren a la derogada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, lo que aconsejaría —asimismo— su concreta y definitiva modificación, sin que, a nuestro juicio, resulte suficiente la interpretación derivada de la Disposición adicional tercera —Referencias normativas— del texto normativo sometido a informe, máxime teniendo en cuenta la extensión de la reforma legal de que se trata, que incorpora múltiples modificaciones y adiciones a los textos legales aún vigentes.

En este sentido, a nuestro juicio, a dichos efectos de actualización normativa, **no resultaría suficiente la previsión de la citada Disposición adicional tercera**, “Referencias normativas”, cuando prevé que:

“1. Las referencias que se efectúan en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, **se entenderán realizadas** al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.” (la negrita es nuestra)

V

Por su parte, el artículo segundo del anteproyecto de ley modificará la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, introduciendo cambios sustanciales que afectan al tratamiento de los datos de carácter personal de las personas dependientes, de sus cuidadores, y de los profesionales afectados. A saber:

En el artículo 2, “Definiciones”, se aborda la redefinición de conceptos como “Actividades de la vida diaria (AVD)”, “Vida independiente” y “Proyecto de vida”, que no genera un impacto directo en la protección de datos. Sin embargo, la implementación de medidas para la vida independiente podría requerir la recopilación de datos personales, lo que exigiría las salvaguardas adecuadas conforme al RGPD y a la LOPDGDD.

El artículo 3, sobre “Principios de la Ley”, incorpora el **principio de autodeterminación y personalización de los cuidados que implica un mayor tratamiento de datos personales sensibles**. Es fundamental garantizar que el procesamiento de estos datos cumpla con los principios de finalidad, proporcionalidad y minimización establecidos en la legislación de protección de datos (artículo 5 RGPD).

Por su parte, el artículo 4, sobre “Derechos de las personas en situación de dependencia”, sistematiza el refuerzo del derecho a la elección de residencia y la prohibición de restricciones ilegítimas, e incrementa la exigencia de medidas de protección de datos. En consecuencia, debe asegurarse la **obligación de confidencialidad y de tratamiento seguro de la información personal, así como la correcta gestión del proceso de elección (artículos 5 y 32 RGPD)**.

En este sentido, el anteproyecto de ley —dentro del elenco de los derechos que se reconocen a las personas en situación de dependencia—, modifica el artículo 4.2, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, incorporando, entre otros, el derecho de la letra i) del citado artículo:

“2. Asimismo, las personas en situación de dependencia disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación vigente, y con carácter especial de los siguientes:
(...)

i) A que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. (la negrita es nuestra)
(...)”

El artículo 4 bis, sobre “Derechos de las personas cuidadoras no profesionales”, reconoce derechos como el de acceso a la información y determinadas medidas de conciliación que implican el tratamiento de **datos personales de los cuidadores**. En consecuencia, **deben establecerse mecanismos de protección para el almacenamiento seguro y la adecuada gestión de estos datos (artículo 32 RGPD)**.

Por su parte, el artículo 5, en lo relativo a la protección de menores de 6 años, se remite a la disposición adicional decimotercera, de cuya aplicación deriva un incremento en el tratamiento de datos de menores (prestación de servicios, realización de valoraciones, y atención y protección). En este

contexto, **es crucial aplicar medidas reforzadas de seguridad y consentimiento informado** en conformidad con la normativa de protección de datos.

A su vez, la reforma propuesta introduce cambios significativos orientados a *mejorar la atención y los derechos de las personas en situación de dependencia*. Así, en el ámbito de la coordinación sociosanitaria, el nuevo artículo 11.1.c) establece los procedimientos y mecanismos para garantizar una atención integral que combine los servicios sanitarios y sociales, asegurando que las personas en situación de dependencia reciban atención sanitaria en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia.

Por su parte, el nuevo artículo 14 redefine las prestaciones de las personas en situación de dependencia, que pueden consistir en servicios o tener naturaleza económica, destinadas a la prevención de situaciones de dependencia, promoción de la autonomía personal y provisión de cuidados y apoyos, y, en el artículo 15 se actualiza el catálogo de servicios que comprenden los servicios sociales de promoción de la autonomía y atención a la dependencia.

A su vez, el artículo 18 permite, de forma excepcional, reconocer una prestación económica cuando la persona dependiente es atendida por su entorno familiar o relacional en condiciones adecuadas; el artículo 19 facilita la contratación de asistentes personales por parte de la persona en situación de dependencia, ya sea directamente o a través de entidades acreditadas, y el artículo 19 *bis* introduce una prestación económica destinada a la contratación de servicios de cuidados y apoyos en viviendas, permitiendo modalidades autogestionadas de forma participativa y sin ánimo de lucro.

En relación con estos últimos preceptos —previsiones de los nuevos artículos 11 y ss. de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre— es fundamental considerar el sometimiento a la normativa de protección de datos en varios aspectos:

Así, en materia de *coordinación sociosanitaria*, la implementación de procedimientos y mecanismos de coordinación entre servicios sanitarios y sociales implica necesariamente el intercambio de datos personales de categorías especiales. **Es crucial garantizar que este intercambio cumpla con los principios de protección de datos, como la minimización, confidencialidad y seguridad, asegurando que solo se compartan los datos personales estrictamente necesarios para la atención integral.**

En cuanto a la *participación de las personas dependientes* en las diferentes acciones y procesos de establecidos en la ley —al involucrar a dichas personas en el diseño, planificación y seguimiento de sus apoyos y cuidados—, **se recopilará y procesará información personal. Se debe**

garantizar que este tratamiento se realice con el consentimiento informado de la persona, **respetando sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición** según lo dispuesto en el RGPD y en la LOPDGDD.

En cuanto a las prestaciones económicas y servicios previstos, la gestión de estos, así como la asistencia personal o los cuidados en viviendas, **requiere el tratamiento de datos personales financieros y de salud**. En consecuencia, las entidades responsables deben implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger estos datos, conforme a la normativa de protección de datos.

Finalmente, la prestación de servicios de teleasistencia y tecnologías de apoyo pueden implicar la **recopilación y tratamiento de datos personales a través de dispositivos tecnológicos**, por lo que es esencial que estos dispositivos cumplan con la normativa de protección de datos, garantizando la seguridad y privacidad de la información recopilada.

En resumen, aunque las modificaciones de la “*Ley de Dependencia*” buscan mejorar la atención y los derechos de las personas en situación de dependencia, es imprescindible que su implementación se realice con cumplimiento estricto del RGPD y de la LOPDGDD, garantizando la protección y privacidad de los datos personales involucrados en todos los procesos y servicios regulados en la ley.

Por su parte, los artículos 21 bis, 22, 23, 23 bis, 24 bis, 25 y 25 bis, se refieren a los servicios de autonomía, teleasistencia, ayuda a domicilio, asistencia personal, cuidados en viviendas y atención residencial. Estos servicios implican un manejo intensivo de datos personales, incluyendo información sobre datos de salud y ubicación de los afectados, en algunos casos mediante tecnologías digitales.

En todos los supuestos analizados en este apartado, la base legal para el tratamiento de los datos de carácter personal reside bien (i) en el interés público (por ser el tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;) —artículo 6.1 e) RGPD—, (ii) o bien el consentimiento informado de los afectados —artículo 6.1 a) RGPD—.

También en relación con los tratamientos de datos derivados de las previsiones normativas de estos preceptos, deberán implantarse las correspondientes **medidas de seguridad, con especial atención en relación con la restricción de acceso a los datos personales objeto de tratamiento**.

Asimismo, deberán tenerse en cuenta los **principios de protección de datos del artículo 5 RGPD**, y, muy especialmente, el principio de minimización de datos, procediendo únicamente a la recolección y uso de la información personal estrictamente necesaria en relación con los fines de los tratamientos.

VI

El resto de la reforma legal de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, afectará a la protección de datos personales principalmente en los *procedimientos administrativos relacionados con la dependencia, la capacidad económica y la calidad en la prestación de servicios.*

En el nuevo artículo 27.1 se establecen criterios comunes para los órganos de valoración de la dependencia. La especificación de los apoyos y cuidados que requiere una persona supone el tratamiento de datos sensibles de salud, que exige medidas reforzadas de seguridad.

El artículo 28.7 introduce la posibilidad de tramitación urgente de expedientes por factores de vulnerabilidad. Esto implica la recopilación y tratamiento de datos personales sensibles, como información socioeconómica, de salud o situaciones de violencia de género, lo que exige garantías adicionales en su tratamiento.

Por su parte, el artículo 29 —sobre elaboración del Programa Individual de Atención (PIA)— se refiere a las preferencias y necesidades de la persona dependiente, así como a la información de cuidadores no profesionales, generando la necesidad de un tratamiento seguro de estos datos.

En los artículos 32 bis y 33 se regula la determinación de la capacidad económica de los beneficiarios, tomando en cuenta su renta y patrimonio. Esto implicará un tratamiento de datos financieros y personales que debe cumplir con los principios de proporcionalidad y minimización de datos.

Los nuevos artículos 34 y 35 contienen la regulación de la calidad en el sistema de atención, estableciendo la necesidad de evaluar procesos y publicar información sobre la calidad de los servicios. En este sentido, deberá garantizarse que los datos personales utilizados en estas evaluaciones se anonimizan y cumplen con las normativas de protección de datos.

A su vez, el nuevo artículo 37.3 se refiere a la realización de estadísticas estatales sobre dependencia y a la publicación de los datos abiertos previstos en este precepto, que, según se prevé expresamente, deben alinearse con las previsiones de la normativa de protección de datos.

Finalmente, en cuanto a las Disposiciones finales del anteproyecto que se informa, entre otras cuestiones, se prevé:

- (i) La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Se amplían las obligaciones de accesibilidad en comunidades de propietarios, estableciendo la obligatoriedad de ciertas obras y facilitando su financiación mediante ayudas públicas. En materia de protección de datos, esta modificación puede implicar el tratamiento de datos personales de personas con discapacidad o mayores de 70 años que soliciten dichas obras.
- (ii) La modificación de la Ley de Contrato de Seguro incorpora la prohibición de la discriminación por causa de discapacidad en la contratación de seguros, garantizando la igualdad de condiciones salvo causas objetivas. En este sentido, se refuerza la necesaria justificación del uso de datos sensibles de salud y discapacidad, y su tratamiento proporcionado.
- (iii) De la nueva regulación del marco de referencia sobre ajustes razonables, se desprende la garantía en la accesibilidad y la igualdad de trato. En el ámbito de la protección de datos, dichas acciones podrían afectar a la recopilación y uso de datos personales sobre accesibilidad.

Las modificaciones normativas más arriba analizadas refuerzan la **necesidad de que** —en la reforma legal de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia—, **se implementen estrictas medidas de protección de datos debido al tratamiento de información altamente sensible.**

Las principales áreas de impacto son:

1. La garantía del respeto del RGPD y la LOPDGDD: El tratamiento de datos de salud, económicos y sociales de las personas en situación de dependencia exige el cumplimiento riguroso del RGPD y de la LOPDGDD. Se debe garantizar la licitud del tratamiento basado en el consentimiento explícito o en otra base jurídica adecuada de las establecidas en el artículo 6.1 RGPD.
2. El principio de minimización de datos: Los procedimientos administrativos deben limitarse a recopilar solo los datos estrictamente necesarios para las finalidades previstas en cada caso (tanto en lo relativo a las circunstancias personales y de salud, como en lo atinente a la determinación de capacidad económica y la asignación de apoyos).

3. La adopción de medidas de seguridad reforzadas: La información tratada es de especial protección, lo que implica la implementación de medidas de seguridad reforzadas, como el cifrado de datos, restricciones de acceso y auditorías periódicas.
4. La transparencia y los derechos de los afectados: Se deben reforzar los mecanismos para que las personas en situación de dependencia puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición.
5. La anonimización y reutilización de datos: En la elaboración de estadísticas y la publicación de informes sobre calidad del sistema, se debe asegurar la anonimización de los datos para evitar la identificación indirecta de las personas beneficiarias.

En conclusión, las modificaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, previstas en el anteproyecto de ley que se informa, requieren una adecuada implementación de la normativa de protección de datos, garantizando que el tratamiento de información personal se realice con las máximas garantías de seguridad y respeto a los derechos de las personas dependientes y de sus cuidadores, en los términos que han quedado expuestos.

VII

Según se viene analizando, tanto en las leyes objeto de reforma, como en el propio anteproyecto de ley que las modifica, se prevé la recogida y tratamiento de un amplio conjunto de datos de carácter personal, muchos de ellos referidos a categorías especiales de datos, como, entre otros, los **datos de salud, de dependencia y de discapacidad**.

Pues bien, en estos casos, que implican el tratamiento de categorías especiales de datos personales, el Tribunal Constitucional en su sentencia 76/2019 —FJ 6 y 8—, destaca **la imperiosa necesidad de recoger en la ley habilitante las correspondientes garantías**:

“c) La necesidad de disponer de garantías adecuadas es especialmente importante cuando el tratamiento afecta a categorías especiales de datos, también llamados datos sensibles, pues el uso de estos últimos es susceptible de comprometer más directamente la dignidad, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad.”

La exigencia de especial protección de esta categoría de datos está prevista en el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981 (instrumento de ratificación publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 274, de 15 de noviembre de 1985), cuyo artículo 6 establece lo siguiente: «Los datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas u otras convicciones, así como los datos de carácter personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse automáticamente a menos que el derecho interno prevea garantías

apropiadas. [...]» Esa exigencia ha sido igualmente afirmada por la Agencia Española de Protección de Datos. De acuerdo con el preámbulo de su Circular 1/2019, esas garantías adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales de los afectados «adquieren una especial relevancia tanto por la importancia de los datos personales objeto de tratamiento como por tratarse de tratamientos a gran escala de categorías especiales que entrañarán un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas difícilmente mitigable si no se toman medidas adecuadas». Asimismo, como ya se indicó en el fundamento jurídico 4 de esta sentencia, el Reglamento (UE) 2016/679 reitera la exigencia de que el legislador que regule el tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas establezca dichas garantías adecuadas [artículo 9.2.g) y considerando 56].

Las garantías adecuadas deben velar por que el tratamiento de datos se realice en condiciones que aseguren la transparencia, la supervisión y la tutela judicial efectiva, y deben procurar que los datos no se recojan de forma desproporcionada y no se utilicen para fines distintos de los que justificaron su obtención. La naturaleza y el alcance de las garantías que resulten constitucionalmente exigibles en cada caso dependerán de tres factores esencialmente: el tipo de tratamiento de datos que se pretende llevar a cabo; la naturaleza de los datos; y la probabilidad y la gravedad de los riesgos de abuso y de utilización ilícita que, a su vez, están vinculadas al tipo de tratamiento y a la categoría de datos de que se trate. Así, no plantean los mismos problemas una recogida de datos con fines estadísticos que una recogida de datos con un fin concreto. Tampoco supone el mismo grado de injerencia la recopilación y el procesamiento de datos anónimos que la recopilación y el procesamiento de datos personales que se toman individualmente y no se anonimizan, como no es lo mismo el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona física, que el tratamiento de otro tipo de datos.

El nivel y la naturaleza de las garantías adecuadas no se pueden determinar de una vez para todas, pues, por un lado, deben revisarse y actualizarse cuando sea necesario y, por otro lado, el principio de proporcionalidad obliga a verificar si, con el desarrollo de la tecnología, aparecen posibilidades de tratamiento que resultan menos intrusivas o potencialmente menos peligrosas para los derechos fundamentales. (FJ.6) [...]

(iv) Por último, debemos recordar que el Reglamento general de protección de datos establece las garantías mínimas, comunes o generales para el tratamiento de datos personales que no son especiales. En cambio, no establece por sí mismo el régimen jurídico aplicable a los tratamientos de datos personales especiales, ni en el ámbito de los Estados miembros ni para el Derecho de la Unión. Por ende, tampoco fija las garantías que deben observar los diversos tratamientos posibles de datos sensibles, adecuadas a los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que existan en cada caso; tratamientos y categorías especiales de datos que son, o pueden ser, muy diversos entre sí. El reglamento se limita a contemplar la posibilidad de que el legislador de la Unión Europea o el de los Estados miembros, cada uno en su ámbito de competencias, prevean y regulen tales tratamientos, y a indicar las pautas que deben observar en su regulación. Una de esas pautas es que el Derecho del Estado miembro establezca «medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado» [artículo 9.2.g) RGPD] y que «se ofrezcan garantías adecuadas» (considerando 56 RGPD). Es patente que ese establecimiento de medidas adecuadas y específicas solo puede ser expreso. Si la norma interna que regula el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas no prevé esas garantías adecuadas, sino que, todo lo más, se remite implícitamente a las garantías generales contenidas en el Reglamento general de protección de datos, no puede considerarse

que haya llevado a cabo la tarea normativa que aquel le exige. (FJ.8)”

Con el fin de dar adecuado cumplimiento a la normativa y jurisprudencia citada, esta Agencia viene recomendando repetidamente en sus informes que el *prelegislador*, en aquellos casos en que los tratamientos tienen **como base jurídica el art. 6.1.c) o e) del RGPD** (esto es, tratamientos cuya base es una obligación legal o una misión de interés público), y venga establecida por el Derecho de la Unión o en el Derecho del Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento y tal Derecho regule la operación específica de tratamiento o conjunto de operaciones en cuestión, como es el caso de las operaciones de tratamiento reguladas por el anteproyecto de ley que se informa, o cuando el mismo implique el tratamiento de categorías especiales de datos personales, **haga uso de la posibilidad que establece el art. 35.10 RGPD, de modo que sea el propio órgano proponente de la disposición general, en el curso del procedimiento de creación de la norma (ley, real decreto, orden, etc.), quien realice una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) como parte de una evaluación de impacto general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica.**

El art. 2.1, letra g), del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo es suficientemente expresivo de la voluntad del legislador de incluir en la MAIN, dentro del concepto “Otros impactos”, el análisis del “impacto que tendrá para la ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital que conlleve la norma”. A saber:

“g) Otros impactos: La memoria del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter social y medioambiental, al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y al impacto que tendrá para la ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital que conlleve la norma.”

En este sentido, según se observa, en el apartado III **–ANÁLISIS DE IMPACTOS–** de la MAIN que acompaña al anteproyecto de ley que se informa, se contiene una amplia referencia a diferentes tipos de impactos; sin embargo, por parte del redactor de la reforma legal, **no se ha realizado previsión alguna** en relación con el derecho fundamental a la protección de datos de los afectados.

Dicha previsión, de haberse hecho, permitiría que los responsables o encargados del tratamiento no tuvieran, una vez aprobada la norma y con carácter previo a la realización del tratamiento de datos, la obligación de realizar dicha evaluación de impacto de datos personales (EIPD) prevista en el art. 35 RGPD (y que el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, ha considerado asimismo obligatoria), precisamente por haberse llevado ya a cabo en el seno del

proceso de gestación de la norma de carácter general.

En consecuencia, no habiéndose llevado a cabo por el órgano proponente del anteproyecto de ley una EIPD, ni constando en consecuencia en la MAIN evaluación alguna del impacto del tratamiento de los datos de carácter personal, **debe sugerirse su realización** en los términos que han quedado expuestos, para garantizar y preservar la dignidad y derechos fundamentales de las personas afectadas, en consonancia con el mandato constitucional de respeto a la dignidad humana (artículo 10.1 CE.).

En consecuencia, en nuestra opinión, en el presente supuesto sería conveniente la realización de la correspondiente Evaluación de Impacto de Datos Personales, y su posterior incorporación a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo —MAIN— del anteproyecto de ley que se informa.

Finalmente, como se adelantó *ut supra*, se sugiere que la previsión sobre “Referencias normativas” de la disposición adicional tercera, se sustituya *pura y simplemente* por la modificación o adición de uno o dos artículos, o bien de una o dos disposiciones adicionales referidas, **respectivamente** al Texto Refundido de la **Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social**, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la **Ley 39/2006, de 14 de diciembre**, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, **en los que se incorporen** las necesarias garantías de los derechos, y cumplimiento de las obligaciones y principios en materia de protección de datos, que podría ser del siguiente tenor:

“Todos los tratamientos de datos de carácter personal derivados de la aplicación de esta Ley, se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, garantizando el derecho fundamental de los afectados a la protección de sus datos de carácter personal”.

Asimismo, se sugiere la incorporación de un precepto —o de dos artículos, siguiendo la sistemática de la reforma legal— en el que se reconozcan expresamente los derechos de los afectados por los tratamientos de datos derivados de las normas que se modifican, en relación con el acceso, rectificación, oposición, supresión, y limitación del tratamiento de sus datos personales, garantizando, a su vez, los principios de protección de datos del

artículo 5 RGPD, y la implementación de las medidas de seguridad necesarias en orden al cumplimiento del artículo 32 RGPD.